



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE.12920/2021

**“HONDA MOTOR DE ARGENTINA SA c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de un recurso interpuesto por Honda Motor de Argentina SA contra la resolución 162 del 30/06/2020 que al confirmar una anterior determinó la existencia de deuda por falta de aportes y contribuciones al sistema previsional con más una multa, por el periodo 01/2010 a 01/2019.

El presentante cuestiona el reclamo efectuado pues entiende que no existe base fáctica ni jurídica que avale el reclamo patrimonial que se le efectúa. Afirma que la decisión administrativa se fundamenta en simples presunciones, que la persona conceptualizada como su dependiente - Sr. Gómez Marotta- no lo es, que se le ha vedado la posibilidad de producir prueba en defensa de sus derechos, que el ente de fiscalización carece de potestad para tipificar las relaciones jurídicas configuradas y que, además, la obligación de cotizar respecto a la persona involucrada se encontraría prescripta. (ver memorial impugnatorio).

Desde el punto de vista formal corresponde proceder a la apertura de la presente instancia judicial pues, mediante comprobante de pago presentado el 19 de agosto de 2.021, se acreditó el oportuno abono del crédito en disputa.

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento, es dable advertir que el reclamo patrimonial efectuado por la AFIP no puede considerarse prescripto pues el plazo de prescripción, en este tipo de acciones, es decenal conforme lo establece el art. 16 de la ley 14.236 y no el quinquenal conforme reza el art. 2.560 del CCCN, en virtud de lo cual corresponde analizar si lo actuado por el ente de control es ajustado a derecho.

El artículo 23 de la LCT expresamente establece que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato o





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

relación de trabajo salvo que, por las circunstancias las relaciones o las causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

Dicha presunción es iuris tantum es decir que es susceptible de ser alterada por prueba en contrario, extremo que entiendo no se configura en autos.

En efecto, a pesar de los esfuerzos realizados por el apelante, la resolución administrativa debe confirmarse ya que las actas labradas por los inspectores fiscales gozan de la presunción de legitimidad que establece el art. 12 de la ley 19.549 y el ente de control puede aplicar presunciones a su favor (art. 4º ley 26.063; Pérez, Daniel “Presunciones, pruebas, indicios y excesos en el Procedimiento de la Seguridad Social” pág. 104; Grisolia, Julio A., “Manual de Derecho Laboral”, p. 1060) e, incluso, determinar la existencia de deuda patrimonial de cotizaciones impagas en forma oficiosa (arts. 2º y 3º, ley 26.063). Por otra parte, se encuentra, también, autorizado a tipificar como relación de trabajo un negocio jurídico como el detectado por sus agentes respondiendo al principio de eficiencia y eficacia administrativa (ver leyes 18.695 y 25.212 conf. crit. CSJN 24/02/09 “Aerolíneas Argentina SA c/Ministerio de Trabajo” Fallo 332:170).

En el caso, no puede concluirse que las prestaciones de Gómez Marotta fueran las propias de un fletero autónomo según lo dispuesto por la ley 24.653, norma que regula el transporte automotor de cargas. Ello por cuanto el vehículo que conducía era de propiedad de la apelante y, en la materia, debe jugar el principio de primacía de la realidad ya que la relación o contrato de trabajo se desarrolla, cualquiera sea la forma o denominación, entre una persona física que compromete sus servicios a cambio de una retribución en dinero bajo la dependencia de otra.

Al respecto, el artículo 21 de la LCT establece que habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres.

Por su parte, el artículo 22 de la LCT expresa que habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración cualquiera sea el acto que le de origen.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Ahora bien, la persona que transporta productos de una empresa en un vehículo que no le es propio, en principio trabaja bajo dependencia de otra, la que en el caso que nos ocupa no puede ser sino la recurrente que es la titular del rodado en cuestión.

El hecho que el Señor Gómez Marotta figure inscripto como trabajador autónomo no determina “per se” su calidad de independiente. Ante la situación configurada la impugnante debió ofrecer como prueba exculpatoria de su responsabilidad patrimonial un contrato escrito mediante el cual la persona física se compromete, en su condición de empresario y con una organización propia, a prestar servicios como fletero y/o a sustituir tal actividad personal por la de un tercero que fuera su dependiente en caso de no poder cumplir con la tarea en forma personal. Tal documento nunca fue incorporado a la causa, debiendo presumirse su inexistencia atento la prueba ofrecida ante esta instancia.

Con respecto a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación y lo establecido por el Superior Tribunal de la Nación en ocasión de votar la causa “Las Marías SACIFA c/Misiones Provincia de s/acción declarativa” sent. del 04/09/18 se regulan los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$ 135.015) y 10 UMA (\$90.010), respectivamente (CSJN Ac. 12/2022).

Por lo expuesto propongo declarar habilitada la instancia judicial, se confirme la resolución recurrida, se impongan las costas al apelante (art. 68 CPCCN), fijar los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$ 135.015) y 10 UMA (\$ 90.010) respectivamente, conf. CSJN. Ac. 12/2022.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto de la Doctora Dorado.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero a mis colegas de Sala.

En virtud de lo expresado **el Tribunal**

RESUELVE: 1º) Declarar habilitada la instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas al impugnante (art. 68 CPCCN), 4º)





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Establecer los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$ 135.015) y 10 UMA (\$ 90.010) respectivamente, conf. CSJN. Ac. 12/2022. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Ante mí: **AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI**
Secretaria de Cámara

ALP.

